

A LA FISCALIA PROVINCIAL DE MADRID
c/ Santiago de Compostela nº 96, 28071 de Madrid

DOÑA ALEJANDRA JACINTO URANGA, mayor de edad, con DNI [REDACTED] diputada y portavoz de UNIDAS PODEMOS en la Asamblea de Madrid y domicilio a efectos de notificaciones en la Plaza de la Asamblea nº 1 acceso principal Avenida Pablo Neruda 142 CP 28018 de Madrid y **DOÑA MÓNICA GARCIA GÓMEZ**, mayor de edad, con DNI [REDACTED] portavoz de MÁS MADRID en la Asamblea de Madrid y domicilio a efectos de notificaciones en la Plaza de la Asamblea nº 1 acceso principal Avenida Pablo Neruda 142 CP 28018 de Madrid, presentan denuncia por posibles delitos de:

- Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo (319 y 320 CP)
- Delito contra los recursos naturales y el medio ambiente (325 y siguientes CP)
- Delito de prevaricación administrativa (404 y siguientes CP), cohecho (419 y siguientes CP) y encubrimiento (451 CP)
- Coacciones inmobiliarias (172 CP)

Contra sus presuntos autores, que se identifican provisionalmente como **AMAEXCO** (Asociación de Excavadores y Constructores de la Comunidad de Madrid) con domicilio social en Carretera Villaverde a Vallecas Km, 3,5 de Madrid, C.P. 28053, y CIF: G86217205, y **D. Markel Gorbea Pérez**, Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana, con domicilio en C/ Honrubia, Nº8 de Madrid, C.P. 28031, sin perjuicio de otros responsables que puedan aparecer en el curso de la investigación.

Todo ello de acuerdo con los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- El pasado día 4 de diciembre de 2022 una representación del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos y Más Madrid en la Asamblea de Madrid acudimos a inspeccionar la llamada “zona sin asfaltar” del Sector 6 de la Cañada Real Galiana a petición de los vecinos residentes en el Sector 6 de la Cañada Real que previamente han formulado denuncia por los hechos que se describirán a continuación.

En esta zona residen desde hace décadas un buen número de familias con plena tolerancia por parte de la Administración incluso tras su desafectación como vía pecuaria en 2011 a través de la Ley 2/2011 de la Comunidad de Madrid. Es más, en el año 2017 se alcanzó por parte de todos los grupos parlamentarios y el conjunto de

Administraciones afectadas; Ayuntamiento de Madrid, Rivas, Coslada, Comunidad de Madrid y Delegación de Gobierno un “Pacto Regional” por el cual se vienen desarrollando actuaciones públicas de mejora y dignificación de las condiciones de vida de los habitantes así como proyectos de realojo.

En consecuencia y tras la práctica de algunos realojos se han ido liberando parcelas de terreno en la llamada “zona sin asfaltar”, que discurre linealmente entre el Complejo de Incineración de Valdemingómez y el término municipal de Getafe.

Esos terrenos y sus zonas aledañas están siendo utilizados para depositar tierras que provienen de obras de toda la Comunidad de Madrid mediante los camiones que organiza la Asociación AMAEXCO (Asociación de Excavadores y Transportistas de la Construcción de la Comunidad de Madrid). A diario más de 500 camiones entran en la zona para depositar tierras traídas de obras de la construcción de todo Madrid. Cada camión paga una tasa no reglada de 14 € a la asociación AMAEXCO por permitirle verter tierras en la zona sin control ambiental.

Estas actividades son notorias y necesariamente conocidas y toleradas por las autoridades intervinientes y actuantes en la Cañada Real Galiana. Y en concreto por su máximo responsable institucional el Comisionado de Cañada Real Galiana D. Markel Gorbea Pérez, el cual, según refieren muchos de los vecinos visita la zona con frecuencia y les indica que abandonen sus viviendas “por las buenas o por las malas”.

La actividad de vertidos de escombros y enterramiento de escombros ha llevado a que se acumulen montañas de tierra en zonas colindantes a las viviendas habitadas poniendo en riesgo la integridad física de los vecinos dado que esos amontonamientos de tierra ni están apuntalados ni se encuentran dentro de ningún espacio habilitado al efecto que supusiera alguna garantía ante posibles desplazamientos. Además, esos montones de tierra impiden el acceso a la zona de vehículos de emergencia, vehículos policiales y obstaculizan el desplazamiento de los vecinos en su vida cotidiana.

Además, el movimiento de tierras viene enterrando literalmente los escombros sin control ninguno, incluyendo materiales peligrosos y contaminantes (uralitas, materiales con amianto, chatarras, electrodomésticos, etc) en una zona que forma parte del Parque Regional del Sureste, que muchas de sus partes se encuentran protegidas con diversos grados de protección.

Los habitantes de esa zona sufren un continuo hostigamiento que les compele a abandonar sus viviendas y todo ello se produce en un contexto de un negocio de acumulación ilegal de vertidos, sin control aparente, sin supervisión administrativa alguna y sin tener conocimiento de la naturaleza y composición de los vertidos acumulados en una zona habitada.

SEGUNDO.- En Julio de 2016, la Asociación AMAEXCO y el Ayuntamiento de Madrid firmaron un convenio de colaboración para el vertido de tierras y adecuación de terrenos en diferentes áreas del término municipal de Madrid. Dicho convenio tenía una duración de dos años y no llegó a ser renovado a su término. El convenio finalizó el 7 de julio de 2018 sin que haya habido prórroga.

Los vertidos de tierras no cesaron en 2018 como hubiera sido de esperar al concluir el Convenio sino que continuaron y ampliaron su volumen al margen de todo marco normativo habilitante y sin control ambiental alguno.

La tasa que paga cada empresa a AMAEXCO es de 14 euros por camión de tierra. En la actualidad un empleado de AMAEXCO controla la entrada de camiones y sella los albaranes, dentro de una especie de garita en la entrada del enorme vertedero en que se ha convertido la zona. Todo ello sin pagar tasas ni cumplir con los requisitos medioambientales de la Ley Estatal de Residuos y otras.

La denominada “zona sin asfaltar” no consta en el Listado del Centro de Tratamiento de Residuos de la Construcción y la Demolición, que recoge los espacios habilitados para el vertido de residuos en la Comunidad de Madrid

Igualmente se tiene conocimiento de la realización por parte de AMAEXCO de derribos de viviendas sin que medie contrato público alguno que le otorgue esa potestad. No consta la existencia de proyectos de demolición formales ni supervisión administrativa de los mismos, ni, por supuesto, expedientes previos de disciplina urbanística tramitados por la autoridad competente.

Sin embargo, en el marco de la ejecución del Convenio de Realajo para la zona sin Asfaltar del Sector 6 de la Cañada Real Galiana, se ha procedido por parte del Comisionado a recurrir a AMAEXCO para “agilizar” el derribo de viviendas sin sujeción a contrato.

TERCERO.- En abril de 2022, el Comisionado de la Cañada Real Galiana ha realizado un contrato público menor con la asociación AMAEXCO a través de un procedimiento de petición de tres ofertas y adjudicación por menor precio.

El objeto teórico de este contrato es *“OBRA DE VALORIZACIÓN DE MATERIALES NATURALES Y RESTAURACIÓN DEL CAMINO SIN ASFALTAR EN SECTOR 6 DE CAÑADA REAL GALIANA, ENTRE LA INCINERADORA DE VALDEMINGÓMEZ Y EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GETAFE.”*

Según la documentación oficial del contrato, se ha invitado a realizar oferta a las siguientes empresas:

- AMAEXCO: 12.200,00 € (IVA EXCLUIDO)
- LEVERSAN, S.L 35.300,00 € (IVA EXCLUIDO)
- EXCAVACIONES TRANIDE S.A. 17.500,00 € (IVA EXCLUIDO)

Resulta que las empresas LEVERSAN S.L. y Excavaciones Tranide S.A. son asociadas de la propia asociación AMAEXCO.

Consideramos que la anterior contratación incurre en actuaciones prohibidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) (en particular, en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley), pues se falsea la competencia al negociar un contrato con empresas previamente concertadas entre sí.

Además, AMAEXCO es una asociación empresarial sin ánimo de lucro según sus estatutos, cuyos fines son la defensa de los intereses de sus empresas asociadas, en ningún caso la prestación de servicios directa ni a terceros ni, muchísimo menos, a la administración pública.

Como hemos reseñado previamente la contratación se ha realizado por un procedimiento sin concurrencia, donde es la propia administración la que elige a qué entidades se le solicita la propuesta de ofertas. Sorprende que la administración se dirija a una entidad que carece del objeto social necesario para prestar el servicio y que, además, su oferta sea sustantivamente inferior a las de quienes sí lo tienen, que son, a su vez, asociadas de AMAEXCO. A nuestro juicio se ha realizado una apariencia de adjudicación competitiva en lo que, en términos reales, es un contrato previamente acordado entre administración y AMAEXCO.

CUARTO.- La denominada “Zona Sin Asfaltar” del Sector 6 de la Cañada Real Galiana comienza dentro término municipal de Madrid limítrofe con Getafe muy cerca de la Planta de Tratamiento de Agua E.D.A.R Sur y finaliza en la Planta de Gestión de Residuos de “Las Lomas”.

Todo este tramo se encuentra dentro del Parque Regional del Sureste.

El Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Madrid califica dicha área como *Régimen del suelo no urbanizable de protección ecológica* derivando la determinación de los usos del suelo a la Ley 6/1994 de 28 de junio sobre el Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, que se recoge en los planos correspondientes.

Además, la zona tiene calificación de “Zona de Especial Protección de Aves” (ZEPA), por lo que la calificación de los hechos que se describen a continuación se realizan sobre un terreno de especial protección ecológica.

El número de camiones diarios que deposita tierra sobre la Zona Sin Asfaltar alcanza los 500 al día. Estos camiones depositan la tierra sobre los restos de las viviendas derribadas sin hacer un tratamiento correcto de los restos. No solo se están depositando tierras provenientes de distintas obras de la Comunidad de Madrid sino que se está enterrando todo tipo de restos – electrodomésticos, materiales de obra, enseres personales, etc - en el subsuelo del terreno perteneciente a Parque Regional del Sureste.

Se acompañan fotografías que muestran la situación de las viviendas y los vertidos aledaños remitidas por los vecinos.

Imagen nº1.-



Imagen nº2.-



Imagen nº3.-



Imagen nº4.-



Imagen nº5.



A lo largo de toda la Zona Sin Asfaltar se aprecia restos de materiales de construcción entre la tierra. Imagen nº 6.



En los montículos de tierra que alcanzan los cuatro metros se aprecia distintas tierras y distintos materiales que no pueden ser apilados conjuntamente. Entre ellos destaca el hormigón. Imagen nº 7.



Imagen nº 8.



Se acompañan igualmente fotografías tomadas durante la visita de los Grupos Parlamentarios de Unidas Podemos y Más Madrid el pasado 4 de diciembre.



En esta imagen puede apreciarse como los vertidos obstaculizan las vías de acceso, debiendo los vecinos intentar abrir los caminos para que algún vehículo pueda acceder







En estas últimas puede apreciarse la acumulación de escombros y residuos a escasos metros de las viviendas y sin ningún control así como las acumulaciones de tierras aislando las viviendas.

Toda esta actividad se está realizando sin los permisos y documentación necesarios. En concreto, gestionar residuos de construcción y demolición sin la documentación preceptiva contraviene el art. 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, *por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición*.

Artículo 4. Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición.

1. Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos de construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

*a) Incluir en el **proyecto de ejecución de la obra** un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo:*

1.º Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.

2.º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

3.º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.

7.º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

c) Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La

documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes

No consta que exista ninguna documentación preceptiva estipulada por ley.

No existe registro del origen efectivo de todas esas tierras que entran por toneladas diariamente a la zona ni tampoco control administrativo sobre su depósito a lo largo de cientos de hectáreas alterando profundamente el territorio.

QUINTO.- La Ley 7/2022, de 8 de abril, *de residuos y suelos contaminados para una economía circular* específicamente se especifica la manipulación por separado del amianto, debido a su alta peligrosidad

Artículo 30. Residuos de construcción y demolición.

- 1. Sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos, en las obras de demolición, deberán retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto.***

Dada la antigüedad de las viviendas de la denominada “Zona sin asfaltar” la mayoría están construidas con elementos de amianto. La realización de los derribos y soterramientos sin control y sin tratamiento específico del amianto produce que exista amianto en grandes cantidades en la zona, con el consiguiente peligro para la salud de los vecinos.

En la siguiente fotografía se aprecia la situación del amianto a la intemperie.



Tampoco se recogen o se realiza un trato especial con los electrodomésticos abandonados, cuya composición incorpora materiales peligrosos.

Todos estos materiales pueden acabar siendo vertidos a acuíferos a través del subsuelo.

En la siguiente fotografía se aprecia un frigorífico destruido



Una transformación del terreno de estas características durante los últimos años, reconvirtiendo profundamente los fines del suelo, debería haber sido aprobado en Pleno del Ayuntamiento de Madrid, contar con aprobación dentro de los requisitos del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional del Sureste, someter a información pública el mismo, someter a informe de impacto ambiental, así como al resto de requisitos y trámites previstos en la normativa medioambiental y urbanística. En los últimos meses, parece que se ha acelerado el descontrol total sobre la zona con vulneración estructural de toda normativa medioambiental y de ordenación del territorio, tras la que subyacería una motivación económica (favorecer el vertido ilegal sin apenas coste para los camiones de las empresas asociadas a Amaexco) y con una motivación política para la autoridad que lo consiente (agilizar el desalojo de habitantes históricos de la Cañada Real sin acudir a procedimientos garantistas con los derechos adquiridos y los derechos fundamentales de los residentes).

Por ello entendemos que el depósito y compactación de tierras de las que se desconoce su origen y con enterramientos contaminantes, sobre una superficie tan extensa, constituye un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo (art. 319 CP) así como que los funcionarios públicos que teniendo conocimiento de todo ello han silenciado la infracción de normas y omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio han incurrido en el delito del artículo 320 CP.

SEXTO.- Toda la actividad de vertidos que se está llevando a cabo sobre el terreno afecta de forma directa e intencionada a la población que reside la Zona Sin Asfaltar del sector 6 de la Cañada Real a los cuales se les está sometiendo a coacciones sistemáticas para que abandonen sus viviendas.

En concreto, estas actuaciones han sido:

1.- Corte del camino que comunica con la Cañada Real dirección norte. Desconexión del resto de Cañada y accesos de camino históricos.

Desde aproximadamente principios de octubre de 2022, los camiones de AMAEXCO han echado tierra de forma intencionada al camino generando un corte que dificulta e imposibilita el tránsito de las vecinos y que supone una auténtica traba para que a las viviendas de los denunciantes accedan servicios básicos como ambulancias, bomberos o la ruta escolar. Todo ello podrá ser corroborado mediante prueba testifical.

2.- Soterramiento parcial de viviendas habitadas.

Además del corte del camino, como desarrollábamos en la parte referente a los delitos ambientales, **también se han venido llevado a cabo vertidos de tierras en parcelas que ya estaban siendo intervenidas por las autoridades, pero en las que sigue habiendo**

viviendas habitadas. Estos vertidos pretenden aislar las viviendas y hacerlas inhabitables. Además del evidente riesgo que **de que con las lluvias se generen desprendimientos de tierra y roca que llegan a impactar en las viviendas provocando daños y suponiendo un riesgo cierto para la integridad física de las familias.**

3.- Derribos de viviendas habitadas sin notificación de orden alguna.

Pero aún más gravoso que lo anterior es el clima de miedo e inseguridad jurídica que está provocando el hecho de que, por parte de las Autoridades, se estén llevando a cabo **derribos de viviendas habitadas sin contar con autorización judicial.**

Estas actuaciones vienen sucediendo durante los últimos meses y han supuesto el derribo irregular de varias viviendas con años de antigüedad, aprovechando momentos en los que sus habitantes no estaban en el domicilio, y que cuando han regresado han encontrado sus casas reducidas a escombros sin haber recibido una notificación previa. Estos hechos han sido ya denunciados ante el Juzgado de Instrucción Nº 20 de Madrid bajo el número Diligencias Previas 1801/2022.

4.- Amenazas directa de perder su vivienda a las vecinas para forzarlas a irse.

En varias ocasiones, el Comisionado Sr. Markel Gorbea han llevado a cabo amenazas en las que se señalaba a las vecinas que residen legalmente en sus domicilios que iban a expulsar a todos los vecinos de la zona y que se iba a acabar la Cañada Real. Que se tenían que *“ir de allí por las buenas o por las malas”*. Que su misión en la zona no es dignificarla conforme al Pacto Regional suscrito por las administraciones en 2017 sino *“limpiar la Cañada”*.

Este tipo de presiones han sido relatadas por varias vecinas que llevan años viviendo en la zona (algunos desde los años 1980 del siglo pasado y con edad avanzada) y que han visto como en los últimos meses la presencia del Comisionado, D. Markel Gorbea y de Manuel Lyon (presidente de AMAEXCO) incluía advertencias y amenazas veladas y directas para irse de la zona.

SÉPTIMO.- Todos estos hechos, tanto el cierre del camino y el aislamiento de las viviendas mediante el vertido de tierras, como los derribos irregulares y las amenazas para que los habitantes abandonen sus viviendas constituyen un **clima coercitivo destinado a impedir el legítimo disfrute de sus viviendas de la población afectada**, lo cual está específicamente perseguido y agravado por el artículo 172 CP en su párrafo tercero *“También se impondrán las penas en su mitad superior cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.”*

La jurisprudencia ha venido definiendo este *“mobbing inmobiliario”* con conductas reiteradas y hostiles dirigidas a privar a población vulnerable del disfrute legítimo de su vivienda, así pues por ejemplo en la Sentencia 172/2014 del Juzgado de lo Penal Nº 5 de Bilbao, de 20 de mayo de 2014 se incide concretamente en que: *«Pueden considerarse como actos hostiles o humillantes integrantes de una conducta global de acoso una gran variedad de hechos sin necesidad de que los mismos individualmente considerados sean*

típicos siendo relevante la reiteración sistemática y persistente de actos semejantes de la que inferir la finalidad de impedir el legítimo disfrute de la vivienda.»

Siguiendo con la jurisprudencia, y de cara a definir lo que se interpreta como “actos reiterados de acoso por medio de ejecución de actos hostiles o humillantes” vamos a citar algunas de las **características establecidas por el Tribunal Supremo en la sentencia 599/2021, de 7 de Julio, respecto al acoso del art. 172:**

- *Exigencia de que consten actos de acoso reiterado y persistente.*
- *No hace falta que se evidencie que de esos hechos probados le afecte en todas sus esferas de la vida, pero sí que trascienda en una alteración en sus comportamientos que provoque un cambio diferencial, en el «antes» y el «después» a los actos de acoso que quede reflejado en la sentencia.*
- *Debe ser más grave o superior la afectación a las meras molestias ante la inocuidad de los actos. Es decir, algo cualitativamente superior a las meras molestias.*
- *Se exige el resultado de alteración de la vida cotidiana en un grado elevado de importancia, no siendo suficiente con el mero acoso intrascendente o leve para el sujeto pasivo.*

Estos actos quedan acreditados con lo relatado en el cuerpo del presente escrito, así como su gravedad y su clara afectación sobre la vida de los habitantes históricos de la zona afectada.

- *Los actos probados de acoso deben evidenciar que, en condiciones de normalidad, suponen una obligación de modificar sus hábitos, o la prohibición de realizar determinadas conductas por ese sentimiento de inseguridad que le provoca el acosador por los actos que consten probados.*

- *El bien jurídico protegido por el delito de acoso debe estar conectado con sentimiento de seguridad y tranquilidad de la víctima que merece para evitar estos actos acosadores que por su entidad y gravedad le provoquen cambios en su rutina de vida.*

En el caso narrado, es claro que los residentes históricos de la “zona sin asfaltar” se han visto obligadas a modificar sus conductas y están seriamente afectados en su sensación de seguridad y tranquilidad construida en algunos casos por más de 35 años residiendo en su vivienda sin injerencia alguna.

Por todo lo expuesto,

SOLICITAMOS A LA FISCALIA PROVINCIAL DE MADRID : Que tenga por recibido este escrito, y por formulada **DENUNCIA** por hechos presuntamente delictivos y que constituirían los delitos **sobre la ordenación del territorio y el urbanismo (319 y 320 CP), contra los recursos naturales y el medio ambiente (325 y siguientes CP), prevaricación administrativa (404 y siguientes CP), cohecho (419 y siguientes CP), encubrimiento (451 CP) y coacciones inmobiliarias (172 CP)**, y cualquier otro que pudiera desprenderse de la investigación pertinente para lo que deberían determinarse las diligencias oportunas a raíz de la interposición de la presente denuncia.

Es justicia que pedimos en Madrid a 13 de diciembre de 2022.

Firma,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'MG', with a horizontal line underneath.

Doña Mónica García Gómez
Portavoz de Más Madrid

Doña Alejandra Jacinto Uranga
Portavoz de Unidas Podemos